

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA
DEMANDADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
RADICADO	05001-31-05-010-2018-00750-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de jubilación convencional.
DECISIÓN	Modifica y confirma.

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del proceso, promovido por el señor **JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA**, contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 007**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ANTECEDENTES**

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el grado jurisdiccional de consulta a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el día 26 de junio de 2023.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA nació el 29 de septiembre de 1959, y durante su vida laboral se desempeñó como trabajador oficial del extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES desde el 21 de agosto de 1986 hasta 31 de marzo de 2015, su último cargo fue el de “Técnico de Servicios Administrativos”, devengando un salario promedio mensual de \$2.705.919.

Que el 31 de octubre de 2001 la Organización Sindical denominada SINTRASEGURIDAD SOCIAL suscribió una Convención Colectiva de Trabajo con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES estableciendo un régimen pensional más ventajoso que el legalmente establecido (art. 98), al cual se hizo beneficiario el aquí demandante por contar con más de 55 años de edad, y 20 años de servicios, toda vez que la vigencia de la pensión de jubilación convencional se extendió hasta el año 2017.

Que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y SINTRASEGURIDAD SOCIAL se encontraba vigente para el 31 de marzo de 2015, fecha en que culminó la liquidación del ISS, y a partir de ese momento las obligaciones pensionales contraídas por el ISS empleador quedaron a cargo de la UGPP.

Aduce el escrito introductorio que, al creer reunidos los requisitos convencionales, el actor elevó solicitud ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACIÓN el día 5 de diciembre de 2014, pero dicha entidad remitió la reclamación a la UGPP, y esta última mediante resolución N°

RDP 023855 del 12 de junio de 2015, negó la pensión de jubilación convencional deprecada, negativa ratificada en las resoluciones N° 0033475 del 14 de agosto de 2015 y RDP 041193 del 29 de octubre de 2016, que desataron los recursos de reposición y apelación propuestos por el demandante.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que al demandante JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA le asiste derecho a la pensión de jubilación convencional contenida en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004, suscrita entre el ISS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL, a partir del 1° de abril de 2015 (día siguiente al retiro del servicio), junto con los intereses moratorios, o en subsidio la indexación de las condenas y las costas del proceso.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la UGPP través de su apoderada judicial dio respuesta oportuna según consta a folios 1 al 9 del archivo PDF 006, aceptando como ciertos los hechos relativos a la edad del demandante, la liquidación del ISS, la solicitud pensional y la respuesta negativa brindada por la entidad a través de los actos administrativos anunciados en la demanda, sin que le consten aquellos supuestos que aluden a la vinculación laboral del demandante con el ISS, y sus extremos temporales, pues la UGPP no hizo parte de esta relación, siendo los restantes supuestos fácticos, simples apreciaciones subjetivas, jurídicas y jurisprudenciales de la parte demandante, que deberán ser objeto del debate probatorio en la Litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de fondo que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; y PRESCRIPCIÓN”*.

### **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En el fallo objeto de consulta, la juez a-quo en audiencia pública de juzgamiento celebrada el día 26 de junio de 2023, DECLARÓ que al señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA tiene derecho al reconocimiento y pago de

la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita por el ISS con SINTRASEGURIDAD SOCIAL, a partir del 1 de abril de 2015, con una primera mesada equivalente a \$2.285.332 en razón de 13 mesadas anuales.

En consecuencia, CONDENÓ a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL –UGPP- a reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación convencional, a partir del 1 de abril de 2015, en proporción de 13 mesada anuales, y a título de retroactivo pensional dispuso el pago de \$303.904.846 por las mesadas causadas entre el 1 de abril de 2015 al 30 de mayo de 2023, suma que ordenó indexar, autorizando la deducción del aporte obligatorio en salud.

También le ordenó a la UGPP a continuar pagando al actor una mesada pensional en cuantía mensual de \$3.492.229 a partir del 1° de junio de 2023.

ABSOLVIÓ a la UGPP de la pretensión de pago de intereses de mora, y le impuso la condena en costas procesales en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$30.390.485, equivalente al 10% de las condenas en concreto.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, de conformidad con la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 no perdió vigencia con el advenimiento del acto legislativo 001 de 2005, y, por ende, la pensión de jubilación convencional deprecada se causó por haber cumplido la edad y el tiempo de servicios antes del 31 de julio de 2017, que era la vigencia máxima a la que se extendía el beneficio de la pensión de jubilación convencional.

Que el actor tiene en su haber más de 28 años de servicio, y el requisito de la edad pensional, se causó el 29 de diciembre de 2014, ordenando así el disfrute de la pensión de jubilación pensional a partir del día siguiente a la desvinculación de la entidad oficial (1 de abril de 2015).

Para la liquidación de la pensión de jubilación convencional tuvo en cuenta el 100% del promedio mensual de lo percibido en los últimos 3 años de servicio, incluyendo factores salariales tales como: asignación básica mensual, primas de servicios y vacaciones, auxilios de alimentación y transporte, el valor del trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos, en el interregno comprendido entre el 31 de marzo de 2012 y el 31 de marzo de 2015, no accedió a incluir en el salario base de liquidación el factor de incremento por servicios, al no estar contenido en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Declaró impróspera la prescripción parcial de mesadas pensionales, toda vez que la reclamación administrativa se formuló el 5 de diciembre de 2014, el trámite administrativo se culminó el día 29 de octubre de 2016 con la expedición de la resolución RDP 041193 del 29 de octubre de 2016, y la demanda se radicó el día 11 de diciembre de 2018, no alcanzando a transcurrir el término trienal de prescripción en materia laboral y seguridad social.

## **VI. Grado jurisdiccional de consulta**

Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia, fue adversa a los intereses de la entidad pública accionada, y que el estado es garante de sus obligaciones, se dispuso a su favor el grado jurisdiccional de consulta, en los términos del art. 69 del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.

## **Alegatos de conclusión**

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente la apoderada judicial de la UGPP, solicita se emita una sentencia anticipada a través de la cual se defina la carencia de objeto frente a todas las pretensiones de la demanda, y así mismo NO se proceda con la condena en costas a ninguna de las entidades involucradas por tratarse de una política de defensa judicial de la entidad estatal, que en este momento se encuentra de conformidad con el precedente jurisprudencial (sentencia SU-227 de 2021).

A su turno, el apoderado judicial del demandante solicita se confirme lo resuelto en primera instancia, al estimar que el Juzgado acertó al reconocerle al demandante la pensión de jubilación convencional reclamada, ciñéndose para el efecto a la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, e igualmente liquidó la pensión de jubilación de manera cabal, ciñéndose a los parámetros establecidos por el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, procede la Sala a adoptar la decisión de segunda instancia, previas las siguientes,

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de jubilación convencional.**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de la UGPP, si el demandante JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA causó o no el derecho a una pensión de jubilación convencional, en los términos del art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y su organización sindical “SINTRASEGURIDADSOCIAL”; y en el eventual caso de acreditarse esta prestación, deberá la Sala establecer el monto de la mesada pensional y su retroactivo, y si esta suma puede ser objeto de indexación de las condenas.

Para resolver lo pertinente valga precisar algunos asuntos que no resultan ser objeto de controversia en el proceso:

- Que el señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA nació el día 29 de diciembre de 1959, según da cuenta el registro civil de nacimiento aportado con la demanda (fls.11 del archivo PDF 002), por lo que cumplió los 55 años de edad, el mismo mes y día del año 2014.
- Que el actor prestó sus servicios al extinto Instituto de Seguros Sociales, desde el 21 de agosto de 1986 hasta el 31 de marzo de 2015, en calidad de TRABAJADOR OFICIAL y su último cargo en la entidad oficial fue el de “TÉCNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”, según consta en la certificación obrante a folios 12 del archivo PDF 002.

### **Pensión de jubilación convencional**

Del examen de la prueba documental, resulta evidente que el demandante, se encontraba vinculado al extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al momento de entrar en vigencia la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, la cual fue aportada con la demanda (expediente digital), con constancia de depósito ante el Ministerio del Trabajo.

Pues bien, debe decirse que la citada convención previó en su artículo 98, una pensión de jubilación, así:

*“El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales.*

*(...)*

**Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.**

*Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio...”*

En el caso que se examina, está acreditado que el señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA, cumplió los 55 años de edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, esto es, luego de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, reformatorio del artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el cual

en su artículo 1°, parágrafo transitorio N° 3°, dejó sin efectos las reglas pensionales contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, las cuales no podrían extenderse más allá del 31 de Julio de 2010, veamos:

*"Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. **En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010**".*

Esta reforma constitucional, ha sido materia de varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos, se destaca la Sentencia SU-555 del 24 de Julio de 2014, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, donde se abordó la problemática suscitada, particularmente en cuanto a atañe a las disposiciones sobre pensiones convencionales, y lo hizo en estos términos con respecto al parágrafo transitorio N° 3:

*"...la primera frase del parágrafo transitorio 3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. Textualmente señala:*

*(...)*

*Por otro lado, la **segunda parte de este parágrafo transitorio** crea una norma de transición para las reglas de carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa fecha, **resaltando, de manera inequívoca, que las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 2010**, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.*

*En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de*



*2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas prórrogas **no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010**, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010.*

*Del análisis de los mandatos constitucionales descritos, es posible concluir que después del 31 de julio de 2010 **ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y convenciones colectivas**, salvo que los existentes antes de la entrada vigencia del Acto Legislativo estipularán como término inicial, una fecha posterior.*

Visto lo anterior, resulta evidente que la jurisprudencia constitucional no avala la continuidad y los efectos de estos acuerdos convencionales, más allá del **31 de Julio de 2010, salvo que en la norma convencional se estipule como término de vigencia, una fecha posterior o una inicial de mayor alcance.**

También debe tenerse en cuenta que frente al tema del acto legislativo 01 de 2005, la OIT emitió unas recomendaciones al Gobierno Nacional, en respuesta a una queja formulada por varias organizaciones sindicales que denunciaron esta reforma constitucional, y para el asunto que nos interesa, la OIT indicó:

*“ii) en cuanto a las convenciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación, considerando que las convenciones anteriormente negociadas deberían continuar conservando todos sus efectos, incluidos los relativos a las cláusulas sobre pensiones, hasta su fecha de vencimiento, aunque ésta sea después del 31 de julio de 2010, pide al Gobierno que adopte las medidas correctivas pertinentes y que le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto.”*

Pero la Corte Constitucional, en la citada sentencia SU-555 de 2014 manifestó frente a estas recomendaciones lo siguiente:

*“De manera que la primera recomendación de la OIT no cubija: (i) a los trabajadores que soliciten pensiones consagradas en nuevos pactos o convenciones celebrados después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo; o, (ii) a aquellos que cumplen los requisitos para acceder a la prestación convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, **pues no pueden alegar que esperaban recibir pensiones especiales en la***

***medida que para ese momento ya se encontraban vigentes las nuevas reglas constitucionales, por lo tanto sería menos que una expectativa.”***

Similar interpretación frente al tema de las pensiones extralegales fue desplegada en su momento por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la Sentencia SL-1428 del 25 de abril de 2018, con radicación 63.413, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, en el que se abordó alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 frente a la vigencia de los acuerdos convencionales.

Esta alta corporación judicial expresó en la citada providencia que la disposición suprallegal, esto es, el parágrafo transitorio N° 3 del artículo 1° del acto legislativo 01 de 2005, abrogó la posibilidad de que los empleadores y organizaciones sindicales acuerden, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las consignadas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado, dispuso un periodo transitorio, que en todo caso finalizaba a más tardar el 31 de julio de 2010.

Dicho criterio jurisprudencial, ya lo traía la misma Corte de tiempo atrás como es el caso de la sentencia SL 12498-2017 en la que trajo a colación la una sentencia del año 2007, con radicación 31.000, según la cual la expresión *“término inicialmente pactado”* allí contenida, hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que *“si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”, así lo explicó:*

*(...) a juicio de esta Corporación, del precepto constitucional objeto de análisis se desprende una primera regla, consistente en que la expresión «término inicialmente pactado» hace alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes en una convención colectiva de trabajo, de manera que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara el “término inicialmente pactado”». Esto, desde luego, se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia del Acto Legislativo*

*01 de 2005 y cuya fecha de finalización sea ulterior a esta reforma constitucional.*

*La segunda y tercera hipótesis, básicamente expresan un mismo razonamiento, en el sentido que en el evento de que la convención haya sido objeto de sucesivas prórrogas por cuenta de lo dispuesto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010, fecha fijada como límite a la pervivencia de los beneficios pensionales extralegales. A modo de ejemplo, si el vencimiento de un acuerdo colectivo ocurrió en diciembre de 2004 y por fuerza de la renovación legal aludida se ha extendido en múltiples ocasiones de 6 en 6 meses, las prestaciones pensionales allí previstas subsistirán hasta tanto sean eliminados por voluntad de las partes y como máximo hasta el 31 de julio de 2010.*

*La distinción entre ambos escenarios, a primera vista, parecería arbitraria, empero no lo es. En la primera situación, el constituyente delegado tuvo de presente la necesidad de respetar y darle plenos efectos a los compromisos y términos expresamente acordados por las partes, en ejercicio de su derecho de negociación colectiva, que les permite pactar libremente el tiempo de vigencia de los beneficios convencionales, sin que ello pueda ser abolido unilateralmente por una disposición jurídica. Se evitó así, la restricción e imposición heterónoma a lo que autónomamente habían negociado las partes y sobre lo cual recaían sus expectativas legítimas de que lo acordado iba a tener cierta estabilidad laboral.”*

Y luego en la sentencia SL2543-2020, la alta corporación judicial, concluyó que, en principio no era posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010.

Este criterio jurisprudencial, dio lugar a entender que el derecho a la pensión de jubilación convencional se causaba al cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, y si uno de estos requisitos quedaba satisfecho con posterioridad al 31 de julio de 2010, no habría lugar al beneficio convencional.

Sin embargo, un nuevo estudio de la problemática por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia N° SL3635 del 16 de septiembre de 2020, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, estimó procedente el reconocimiento de esta prestación convencional, a favor de aquellos trabajadores oficiales del extinto ISS, que cumplieren los requisitos de tiempo de servicios (20 años) y edad de jubilación (55 años hombres y 50 años mujeres) hasta el año 2017, pues fue la propia

norma convencional la que extendió la vigencia de la convención colectiva hasta esta última anualidad, veamos:

*“...En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, **las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia...**”*

Lo anterior, por cuanto los compromisos consagrados en las Convenciones Colectivas de Trabajo constituyen para la Corte, derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe que atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia.

Este criterio jurisprudencial fue reiterado recientemente por la Sala de Descongestión de la misma Corte, en las sentencias SL399 de 2022 y SL020 de 2024, en la que se accedió al derecho convencional deprecado, bajo los siguientes argumentos:

#### **SL399 de 2022**

*“...En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia.*

*En ese contexto, la Sala debe establecer si el accionante acredita las condiciones y requisitos exigidos en el artículo 98 convencional para obtener el reconocimiento de la prestación pensional, para lo cual ha de recordarse que son hechos indiscutidos en casación, que ingresó al Instituto de Seguros Sociales el 11 de agosto de 1986 y laboró*

*hasta el 1 de septiembre de 2008 (f.º 53), prestando más de 20 años de servicios a la entidad; y que nació el 5 de junio de 1959, por lo que cumplió 55 años de edad en la misma fecha de 2014, en el cargo de coordinador grado 39....”*

Teniendo en cuenta el actual criterio jurisprudencial referido, mismo que resulta vinculante para los demás funcionarios judiciales que integran la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, esta Sala acoge los nuevos razonamientos del órgano de cierre, para resolver la problemática jurídica suscitada, atendiendo las particularidades de la presente litis.

### CASO CONCRETO

Descendiendo a la situación específica del demandante JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA, es evidente que este fue un trabajador oficial del extinto ISS, entidad donde laboró entre el 21 de agosto de 1986 y el 31 de marzo de 2015, para un total de **28 años, 5 meses, y 8 días de servicios**, según lo reconoce la UGPP en la resolución N° RDP-023855 del 12 de junio de 2015, mediante la cual le fue negado el derecho pensional deprecado, veamos:

RDP 023855  
RESOLUCION N° 12 JUN 2015  
RADICADO N° SOP201400065253  
PÁGINA 2 de 6  
Fecha  
POR LA CUAL SE NIEGA UNA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL del Sr. (a) WEST ORTEGA JOSE HERNANDO, con CC No. 70,513,895

Que de conformidad con la anterior certificación que obra en el cuaderno administrativo se establece:

Que este tiempo suma 10,238 días, correspondientes a 1,463 semanas para un total de 28 años 5 meses y 8 días.

Significa lo anterior, que el actor sí contaba con un mínimo de 20 años de servicios a la entidad oficial, y dado que la edad de jubilación (55 años hombres) quedó satisfecha el día 29 de diciembre de 2014, según consta en el registro civil de nacimiento aportado con el escrito inaugural, es evidente que el señor WEST ORTEGA, dejó satisfechos los requisitos convencionales, con anterioridad al año 2017, que fue el plazo de vigencia extendido en el art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 – 2004, suscrita entre el ISS y la

organización sindical SINTRASEGURIDAD SOCIAL, razones suficientes para concluir que el demandante tiene derecho a la pensión de jubilación deprecada, por satisfacer las exigencias allí señaladas dentro del término de vigencia de la citada convención, debiéndose confirmar lo resuelto en este sentido por encontrarse ajustado a derecho y al actual criterio jurisprudencial.

### **Disfrute, prescripción y retroactivo pensional**

Esta Sala en atención al grado jurisdiccional de consulta que le asiste a la UGPP también procedió a analizar, lo referente a la fecha de disfrute pensional, teniendo en cuenta la excepción de prescripción propuesta, el valor de la mesada pensional y su retroactivo.

Encontrando en el referido análisis que, si bien el actor causó su pensión de jubilación convencional a partir del 29 de diciembre de 2014 cuando cumplió la edad convencional de 55 años, el disfrute de esta prestación quedó condicionado al retiro de la entidad oficial, lo cual apenas ocurrió el día **31 de marzo de 2015**, por lo que dicha prestación debió empezarse a pagar a partir del día siguiente, esto es, 1° de abril de 2015.

Y será esta la fecha a partir de la cual deberá liquidarse el retroactivo pensional adeudado, al haberse interrumpido el término trienal de prescripción oportunamente, esto es, con la reclamación administrativa realizada el día 5 de febrero de 2015, según lo reconoce la entidad accionada en la resolución N° RDP-023855 del 12 de junio de 2015 (fls. 30 al 35 del archivo PDF 002), trámite administrativo que concluyó con la expedición de la resolución N° RDP-041193 del 29 de octubre de 2016 que desató el recurso de apelación, iniciándose un nuevo computo del término prescriptivo de 3 años, que tampoco logró su cometido, por cuanto el actor presentó la demanda ordinaria laboral el día 11 de diciembre de 2018 (fls. 10 del archivo PDF 002).

En relación al valor de la mesada pensional y su retroactivo, estima la Sala que al actor le atañe las reglas de liquidación previstas en el numeral ii) del art. 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, esto es, el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres (3) últimos años de servicio, por haber cumplido los 55 años de edad en el mes de diciembre de 2014, veamos:

*“(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio.”*

Con la respuesta a la demanda se aportó una CERTIFICACIÓN DE SALARIOS PAGADOS expedida por el Instituto de Seguros Sociales (carpeta – anexos contestación) en la que constan los conceptos percibidos por el demandante entre el 1° de abril de 2012 al 31 de marzo de 2015, esto es: asignación básica mensual, prima de servicios, prima de vacaciones, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, recargos nocturnos, dominicales, y festivos.

Datos que fueron utilizados por la Sala para realizar su propia liquidación, misma que se ordena incorporar al expediente, para que haga parte integral de esta sentencia, allí se obtuvo como resultado un promedio mensual de **\$2.271.081**, ligeramente inferior a la calculada en la primera instancia que correspondió a la suma de \$2.285.332, sin embargo, al surtirse el grado jurisdiccional de consulta a favor de la UGPP, se modificará lo resuelto en este sentido, siendo la suma de **\$2.271.081** el valor a pagar por concepto de pensión de jubilación a partir del 1° de abril de 2015.

Por lo tanto, el retroactivo pensional causado entre el 1° de abril de 2015 y el 31 de enero de 2024, asciende a la suma de **TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$321.785.445).**

AÑO	IPC	MESADA	# DE MESADAS	SUBTOTAL
2015	6,77%	\$ 2.271.081,00	10	\$ 22.710.810,00
2016	5,75%	\$ 2.424.833,18	13	\$ 31.522.831,39
2017	4,09%	\$ 2.564.261,09	13	\$ 33.335.394,19
2018	3,18%	\$ 2.669.139,37	13	\$ 34.698.811,82
2019	3,80%	\$ 2.754.018,00	13	\$ 35.802.234,03
2020	1,61%	\$ 2.858.670,69	13	\$ 37.162.718,92
2021	5,62%	\$ 2.904.695,28	13	\$ 37.761.038,70
2022	13,12%	\$ 3.067.939,16	13	\$ 39.883.209,07
2023	9,28%	\$ 3.470.452,78	13	\$ 45.115.886,10
2024		\$ 3.792.510,79	1	\$ 3.792.510,79
				\$ 321.785.445,02

A partir del 1° de febrero de 2024, la UGPP deberá continuar pagando al señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA una pensión de jubilación convencional en cuantía mensual de **TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/L (\$3.792.511)** y en razón de 13 mesadas, la cual deberá incrementarse anualmente conforme al IPC certificado por el DANE, siempre y cuando no se presente el fenómeno de la compartibilidad pensional, pues de configurarse esta última hipótesis, la UGPP solo quedará a obligada al pago del mayor valor que eventualmente se llegare a presentar entre la pensión convencional y la pensión legal de vejez.

### **Indexación de las condenas**

Esta Sala, mantendrá incólume la INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS ordenada en la primera instancia, como mecanismo para, además de mantener el poder adquisitivo constante de las mesadas pensionales, subsanar el retardo de la demandada en pagar la pensión de jubilación, a partir del **1° de abril de 2015**, mes a mes y sobre cada una de las mesadas que componen el retroactivo adeudado, y hasta el momento en que se produzca su pago efectivo.

Para liquidar la indexación la pasiva tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia SL359-2021, donde conceptuó la procedencia de la indexación de las condenas sobre las cuales no se impusiera una sanción moratoria, veamos:

*“...la indexación se erige como una garantía constitucional (art. 53 CP), que se materializa en el mantenimiento del poder adquisitivo constante de las pensiones, en relación con el índice de precios al consumidor certificado por el DANE. A su vez, el artículo 1626 del Código Civil preceptúa que «el pago efectivo es la prestación de lo que se debe», esto es, que la deuda debe cancelarse de manera total e íntegra a la luz de lo previsto en el artículo 1646 ibidem. De ahí que, si la AFP no paga oportunamente la prestación causada en favor del afiliado, pensionado o beneficiario, tiene la obligación de indexarla como único conducto para cumplir con los mencionados estándares de totalidad e integralidad del*



*pago. Por tal motivo, es incompleto el pago realizado sin el referido ajuste cuando el transcurso del tiempo devaluó el valor del crédito.*

*Ahora, la indexación no implica el incremento del valor de los créditos pensionales, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como parte de la mesada, puesto que no satisface necesidades sociales del pensionado, y menos como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, garantiza que los créditos pensionales no pierdan su valor real...”*

No existiendo más aspectos de la sentencia que deban ser objeto de consulta, lo resuelto será confirmado en lo demás.

Sin costas en esta instancia, al ser la consulta un trámite oficioso.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutive de la sentencia objeto de consulta de fecha 26 de junio de 2023, proferida por el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto al valor de la pensión de jubilación convencional, y su retroactivo a cargo de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP**, DECLARANDO que el retroactivo de la pensión de jubilación adeudado a favor del señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA por el periodo comprendido entre el 1° de abril de 2015 y el 31 de enero de 2024 corresponde a la suma de TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$321.785.445).

A partir del 1° de febrero de 2024, la UGPP deberá continuar pagando al señor JOSÉ HERNANDO WEST ORTEGA la suma mensual de TRES

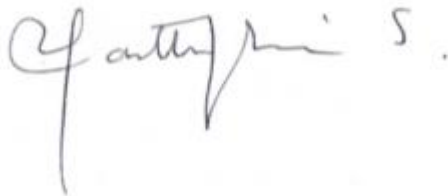
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/L (\$3.792.511), por concepto de pensión de jubilación convencional, en razón de 13 mesadas anuales, la cual deberá incrementarse anualmente con el IPC certificado por el DANE, siempre y cuando no se presente el fenómeno de la compartibilidad pensional, pues de configurarse esta última hipótesis, la UGPP solo quedará obligada al pago del mayor valor que eventualmente se llegare a presentar entre la pensión convencional y la pensión legal de vejez, según lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia objeto de consulta de origen y fecha conocidos.

**TERCERO: Sin COSTAS** en esta instancia.

**CUARTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

LIQUIDACION PENSION DE JUBILACION CONVENCIONAL

2012	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.589.109,00	\$ 1.932.249,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 723.044,00
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 19.822,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMAS DE SERVICIOS LEGALES Y EXTRALEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.409.998,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.415.738,00
PRIMAS DE VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.089,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.007.206,00	\$ -
AÑO 2013	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	\$ 834.282,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.668.564,00	\$ 1.892.486,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00	\$ 227.904,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 22.872,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 41.170,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 6.159,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMAS DE SERVICIOS LEGALES Y EXTRALEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.952.002,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.468.406,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.092.886,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AÑO 2014	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.709.277,00	\$ 1.875.077,00	\$ 1.742.437,00	\$ 1.742.437,00	\$ 1.742.437,00	\$ 1.742.437,00	\$ 1.742.437,00	\$ 1.568.193,00	\$ 58.081,00
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 46.192,00	\$ 45.744,00	\$ 41.170,00	\$ 1.525,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMAS DE SERVICIOS LEGALES Y EXTRALEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.997.722,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.533.850,00
PRIMA DE VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.431,00	\$ -	\$ 3.159.814,00	\$ -	\$ -
AÑO 2015	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL	\$ 1.806.211,00	\$ 1.806.211,00	\$ 1.806.211,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ 45.744,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMAS DE SERVICIOS LEGALES Y EXTRALEGALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRIMA DE VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 4.464.578,00	\$ 5.321.732,00	\$ 5.321.732,00	\$ 5.104.630,00	\$ 5.861.659,00	\$ 11.796.315,00	\$ 5.257.958,00	\$ 8.413.275,00	\$ 3.737.000,00	\$ 8.417.772,00	\$ 8.086.346,00	\$ 9.975.935,00

\$ 81.758.932,00  
\$ 2.271.081,44